

EN EL PRI NOS PREOCUPA EL FUTURO DE VERACRUZ Y MEXICO



La conducción del Estado mexicano enfrenta en la actualidad un escenario de tensiones acumuladas que se manifiestan de manera particularmente grave en tres dimensiones estratégicas: la seguridad pública, el desempeño económico, y el desarrollo social. A pesar del discurso oficial centrado en la “transformación” y la supuesta reconfiguración de las instituciones públicas en favor del bienestar nacional, los resultados empíricos muestran una brecha creciente entre la narrativa gubernamental y la realidad experimentada por la población. Este análisis examina críticamente las inconsistencias, retrocesos y omisiones que han caracterizado la gestión federal en estos ámbitos, y reflexiona sobre las implicaciones institucionales de tales fallas para el sistema democrático mexicano. I. Crisis de Seguridad: El Estado en Retirada y el Avance del Crimen Organizado La política de seguridad implementada durante la actual administración federal ha sido objeto de cuestionamientos severos debido a sus resultados contraproducentes. Lejos de reducir la violencia, el país ha experimentado cifras históricas de homicidios, desapariciones y territorios capturados de facto por organizaciones criminales. La estrategia denominada “abrazos, no balazos”, que pretendía constituir una alternativa humana y preventiva frente al enfoque militarizado de sexenios anteriores, ha derivado en una inacción deliberada del Estado frente a grupos armados que continúan extendiendo su influencia.

La falta de resultados es evidente en los municipios donde el crimen organizado ejerce control sobre actividades económicas, procesos electorales y formas de vida comunitaria. El debilitamiento institucional se agrava por la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, sin una estructura de rendición de cuentas que garantice transparencia. Este fenómeno, lejos de fortalecer al Estado, ha generado una militarización opaca, sin efectos concretos en la pacificación del país. Asimismo, la política de desapariciones enfrenta un deterioro profundo. La renuncia de funcionarios claves, la descalificación pública de colectivos de búsqueda y la manipulación de cifras oficiales son síntomas de una administración que, en lugar de fortalecer mecanismos forenses y de investigación, ha optado por minimizar el problema en el discurso, con un costo humano incalculable. El Estado, en su función más básica de garantizar seguridad, se encuentra rebasado y, peor aún, ha renunciado en muchos casos a ejercer su autoridad.

II. Economía: Entre la Narrativa Triunfalista y la Estancada Realidad Productiva En el ámbito económico, la actual administración ha insistido en presentar como logros históricos la estabilidad macroeconómica, el control inflacionario y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, un análisis riguroso revela un contexto mucho menos alentador. El crecimiento del PIB ha sido insuficiente, con periodos marcados por contracción, recuperación lenta y falta de un modelo de desarrollo que estimule la productividad y la inversión. El debilitamiento del Estado de Derecho, junto con decisiones unilaterales —como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la revisión masiva de contratos o la falta de certidumbre energética— ha erosionado la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Esta incertidumbre regulatoria ha provocado la salida de capitales, la reducción de inversión privada y un estancamiento estructural en sectores clave como infraestructura, innovación y tecnología. Por otro lado, el discurso gubernamental recurre con frecuencia a la política social como evidencia de bienestar económico. No obstante, los programas sociales carecen de evaluaciones sólidas de impacto y su diseño, basado mayoritariamente en transferencias directas, no ha logrado disminuir significativamente los índices de pobreza ni mejorar las capacidades productivas regionales. La ausencia de políticas públicas integrales condena a estos programas a funcionar más como instrumentos clientelares que como mecanismos de movilidad social. Finalmente, la transición energética —un tema prioritario en la economía global— ha sido tratada con desdén por la administración federal, favoreciendo combustibles fósiles y frenando la inversión en energías limpias. Esta visión anclada en el pasado compromete la competitividad del país y limita su capacidad para insertarse con éxito en las cadenas globales de valor del siglo XXI.



III. Política Social: Retrocesos Programáticos y Debilitamiento Institucional

A pesar de la insistencia discursiva en la “justicia social”, la política social del gobierno federal se caracteriza por la desarticulación de instituciones, la concentración de decisiones y el desmantelamiento de programas con probada eficacia. La desaparición de estancias infantiles, el retiro de fondos para refugios de mujeres, la eliminación de programas culturales, de ciencia y tecnología, y la reducción de apoyos al campo revelan una visión centralizada que privilegia programas sin enfoque multidimensional ni seguimiento técnico. Es particularmente preocupante la eliminación de instituciones intermediarias bajo el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, esta medida ha llevado a un vacío institucional que afecta directamente la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud. La creación del INSABI, seguida por su abrupto fracaso y posterior desaparición, evidencia no solo improvisación, sino incapacidad para formular políticas públicas sostenibles. La austeridad mal implementada ha derivado en desabasto de medicamentos, precarización del personal de salud y deterioro de la infraestructura hospitalaria. Del mismo modo, la política educativa ha sufrido retrocesos significativos. El retiro de evaluaciones docentes, la reducción de recursos para escuelas de tiempo completo y el enfoque ideologizado de los nuevos libros de texto han generado un ambiente adverso para la calidad educativa. En lugar de fortalecer competencias y capacidades, se ha optado por una narrativa antiinstitucional que vulnera la autonomía académica y limita las oportunidades de las nuevas generaciones.